

Id Cendoj: 35016340012004100734  
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social  
Sede: Palmas de Gran Canaria (Las)  
Sección: 1  
Nº de Recurso: 1457/2001  
Nº de Resolución: 592/2004  
Procedimiento: Recurso de suplicación  
Ponente: EDUARDO JESUS RAMOS REAL  
Tipo de Resolución: Sentencia

Secretaria: D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> EUGENIA CALAMITA DOMÍNGUEZ

Ilmos. Sres:

D. HUMBERTO GUADALUPE HERNÁNDEZ

D<sup>a</sup> MARÍA JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ

D. EDUARDO RAMOS REAL

-----  
En Las Palmas de Gran canaria, a 10 de Junio de 2004.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen.

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

### **SENTENCIA**

En el rollo de suplicación interpuesto por D. Germán contra la sentencia de fecha 14 de marzo de 2001, dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL Nº 4 de los de Las Palmas de Gran Canaria, en los autos de juicio 625/1997 sobre prestaciones, ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. D. EDUARDO RAMOS REAL.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Según consta en autos se presentó demanda por D. Germán contra el INSTITUTO NACIONAL de la SEGURIDAD SOCIAL (INSS) y la TESORERÍA GENERAL de la SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) y que en su día se celebró la vista, dictándose sentencia con fecha 14 de marzo de 2001 por el JUZGADO de lo SOCIAL Nº 4 de los de Las Palmas de Gran Canaria .

SEGUNDO.- En la sentencia de instancia y como hechos probados se declararon los siguientes:

PRIMERO.- El demandante, nacido el 4-7-47 está afiliado al RGSS teniendo como profesión habitual la de cocinero, y tiene una base reguladora a los efectos de esta litis de 62.348 pts. SEGUNDO.- En Junio de 1989 inició un proceso de ILT, extendiéndose partes de confirmación hasta noviembre de 1996. TERCERO.- Sin embargo no se le abonaron prestaciones de ILT, y tampoco de invalidez provisional, esto último según resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha 4-2-91. CUARTO.- Obra en autos informe de vida laboral del actor, que se da por reproducida. QUINTO.- Percibe pensión no contributiva de invalidez con fecha de efectos 1-3-93, al tener, según el EVO un grado de minusvalía del 66 puntos porcentuales, de los que 5 se corresponden con facturas sociales. SEXTO.- En Noviembre de 1996 se inició a su instancia expediente de invalidez permanente, emitiéndose informe médico de síntesis el 13-12-96, en los términos que obran en autos, y recayendo dictamen -propuesta del EVI el 16-12-96 determinando como

cuadro clínico residual "HTA. **Fibromialgia** . Hipoacusia bilateral moderada", y se propuso la no declaración de invalidez por no apreciarse menoscabo funcional significativo, siendo así resuelto por la Dirección Provincial del INSS en resolución de 10-3-97. Se formuló reclamación previa que fue desestimada. SÉPTIMO.- Presenta el siguiente diagnóstico y pronóstico: DIAGNOSTICO: Síndrome depresivo de repetición, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, angina de esfuerzo, hipoacusia sensorial bilateral moderada; PRONOSTICO DE VIDA LABORAL: De las dolencias que padece el examinado hay que destacar su enfermedad hipertensiva que tiene complicaciones cardíacas y que en ocasiones ha mostrado angor de esfuerzo. El examinado debe permanecer bajo los cuidados continuos y periódicos bajo los servicios de cardiología, llevar medicación permanente y dieta adecuada. En cuanto a su vida laboral le están contraindicados todo tipo de trabajo que implique el ejercicio físico o el stress mental o intelectual y emotivo. Está capacitado para hacer labores de tipo sedentario o pasivo en jornadas limitadas y en ambientes de trabajo saneados y no conflictivos. El examinado puede valerse por sí mismo para realizar sus tareas diarias de supervivencia y mantenimiento (aseo, vestido, comida, etc.).

TERCERO.- La sentencia de instancia contiene el siguiente fallo:

Desestimar la demanda promovida por D. Germán contra INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL absolviendo a los demandados de los pedimentos de aquella.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte actora, no siendo impugnado de contrario. Remitidos los autos a esta Sala se señaló fecha para la votación y fallo de la resolución, habiéndose cumplido con las formalidades legales.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la pretensión del actor, D. Germán , que solicitaba ser declarado en situación de invalidez permanente, grado de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio o, subsidiariamente, total para su profesión habitual de Cocinero, derivada en ambos casos de enfermedad común, confirmando la resolución del INSTITUTO NACIONAL de la SEGURIDAD SOCIAL de fecha 10 de marzo de 1997 que le denegaba la solicitada prestación por considerar que el actor no reunía el periodo mínimo de cotización exigido para ello y porque sus lesiones y menoscabos funcionales no revestían la intensidad suficiente como para ser constitutivos de invalidez permanente en ninguno de sus grados. Frente a la misma se alza la parte actora mediante el presente recurso de suplicación, articulado a través de un motivo de revisión fáctica y dos de censura jurídica a fin de que, revocada la sentencia de instancia sea estimada íntegramente la demanda que da inicio al presente procedimiento.

SEGUNDO.- Por el cauce del *apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral* solicita el recurrente la modificación del relato fáctico declarado probado por el Magistrado de instancia con la finalidad de sustituir la actual redacción del ordinal segundo, expresivo de la situación del actor ante la Seguridad Social, por la siguiente:

"En junio de 1989 inició un proceso de ILT y posteriormente de Invalidez Provisional, extendiéndose partes de confirmación hasta noviembre de 1996".

Basa su pretensión revisoria en los documentos obrantes a los folios 116 a 241, 244 y 245 de las actuaciones, consistentes en partes médicos de confirmación de incapacidad temporal y en dos impresos cumplimentados por la Unidad Médica de valoración de Incapacidades.

Con carácter previo, la Sala, a la vista de la fundamentación del recurso, realizará las siguientes precisiones. En primer lugar, los hechos declarados probados pueden ser objeto de revisión mediante este proceso extraordinario de impugnación (adicionarse, suprimirse o rectificarse), si concurren las siguientes circunstancias: a) que se concrete con precisión y claridad el hecho que ha sido negado u omitido, en la resultancia fáctica que contenga la sentencia recurrida; b) que tal hecho resalte, de forma clara, patente y directa de la prueba documental o pericial obrante en autos, sin necesidad de argumentaciones más o menos lógicas, puesto que concurriendo varias pruebas de tal naturaleza que ofrezcan conclusiones divergentes, o no coincidentes, han de prevalecer las conclusiones que el Juzgador ha elaborado apoyándose en tales pruebas (no siendo cauce para demostrar el error de hecho la "prueba negativa", consistente en afirmar que los hechos que el juzgador estima probados no lo han sido de forma suficiente ( sentencias del Tribunal Supremo de 14 de enero, 23 de octubre y 10 de noviembre de 1986 ) y sentencia del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1990 : "...sin necesidad de conjeturas, suposiciones o interpretaciones y sin recurrir a la prueba negativa consistente en invocar la inexistencia de prueba que

respalde las afirmaciones del juzgador..."); c) que se ofrezca el texto concreto a figurar en la narración que se tilda de equivocada, bien sustituyendo alguno de sus puntos, bien completándola; d) que tal hecho tenga trascendencia para llegar a la modificación del fallo recurrido, pues, aun en la hipótesis de haberse incurrido en error, si carece de virtualidad a dicho fin, no puede ser acogida; e) que en caso de concurrencia de varias pruebas documentales o periciales que presenten conclusiones plurales divergentes, sólo son eficaces los de mayor solvencia o relevancia de los que sirvieron de base al establecimiento de la narración fáctica y, f) que en modo alguno ha de tratarse de una nueva valoración global de la prueba incorporada al proceso.

Hechas las anteriores consideraciones, obligatoriamente hemos de concluir que el motivo de revisión fáctica ha de ser rechazado por la Sala, por cuanto que de los documentos alegados, si bien se desprende que al actor inició en la fecha señalada un proceso de incapacidad temporal y le fue emitida una gran cantidad de partes de confirmación de incapacidad laboral transitoria o incapacidad temporal por los facultativos del INSALUD y del Servicio Canario de Salud (a pesar de que al mismo no se le abonaran prestaciones económicas por ello), no se desprende, en modo alguno, que fuera declarado en situación de invalidez provisional en ningún momento. Tal circunstancia se desprende claramente del contenido de la Resolución de la Dirección Provincial del INSS de fecha 4 de febrero de 2001, obrante al folio 246 de las actuaciones.

Se desestima, en consecuencia, el presente motivo de suplicación, quedando los hechos probados firmes e inalterados.

**TERCERO.-** Por el cauce del *apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral* denuncia el actor y recurrente la infracción del *artículo 138 del T.R. de la Ley General de la Seguridad Social*, definidor de los requisitos para ser beneficiario de las prestaciones por incapacidad permanente. Argumenta en su discurso impugnatorio, en síntesis, que durante el tiempo en el que el actor permaneció en situación de invalidez provisional se le ha de aplicar la doctrina del paréntesis, pues al no poder trabajar ni cotizar durante la misma, el hecho causante, a efectos del cómputo del periodo de carencia específico, debe remontarse a los años inmediatamente anteriores a la fecha de la baja por ILT.

Desestimado el motivo de revisión fáctica, por el que pretendía el demandante que se reconociera que el mismo ha estado en situación de invalidez provisional, cuando no lo ha estado, la cuestión que esta Sala se ha de plantear es doble, primeramente determinar si el actor, a la fecha del acaecimiento del hecho causante (la fecha de emisión del dictamen del EVI, el día 16 de diciembre de 1996), estaba en situación asimilada al alta a efecto de prestaciones por incapacidad permanente y, en segundo lugar, si ese periodo de incapacidad temporal (invalidez permanente) sin derecho a prestaciones económicas ha de ser obviado a la hora de determinar la cobertura del requisito de la carencia específica.

De conformidad con lo dispuesto en el *artículo 138 párrafo 1º; apartado 1º del T.R. de la Ley General de la Seguridad Social*, son requisitos generales para ser beneficiario de las prestaciones por incapacidad permanente:

estar incluido en el campo de aplicación de la Seguridad Social ( *artículo 124 párrafo 1º del T.R. de la Ley General de la Seguridad Social* ) supuesto de hecho previo para que entre en funcionamiento la acción protectora de la Seguridad Social;

estar afiliado y en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social ( *artículo 138 párrafo 1º del mismo cuerpo legal* ), con la excepción que posteriormente veremos; tal exigencia ha de referirse al momento de emerger la contingencia invalidante ( sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1992 );

haber cubierto el periodo mínimo de cotización que se determina en el *apartado 2º del referido artículo 138*, salvo que aquella sea debida a accidente, sea o no laboral, o a enfermedad profesional, en cuyo caso no será exigido ningún periodo previo de cotización.

En el caso de pensiones de incapacidad permanente derivadas de enfermedad común se exige al trabajador un periodo previo de cotización o carencia, que depende de la edad de éste al momento del hecho causante. En un caso como el que ahora nos ocupa, en el que el trabajador tiene cumplidos los veintiséis años de edad, deberá acreditar haber cotizado un cuarto del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los veinte años y la del hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de cinco años de cotización (carencia genérica). Además, al menos la quinta parte del periodo exigible deberá estar comprendido dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante (carencia específica). Si el trabajador no se encuentra en alta ni en situación asimilada al alta, para causar derecho a la pensión de

incapacidad en los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, se le exigirá un periodo previo de cotización de, al menos, quince años, siempre que una quinta parte de dicho periodo esté comprendida en los diez años anteriores al hecho causante.

Pero la jurisprudencia ha relativizado la exigencia del requisito del alta formal o situación asimilada a la misma, llevando a cabo una interpretación no formalista, sino humana e individualizadora, para no dejar injustamente desprotegido al trabajador. Para ello analizan los Tribunales la vida y trayectoria del afiliado y las circunstancias de cada caso para sostener que si reúne el periodo mínimo de cotización y ha estado afiliado y en alta con regularidad en el Sistema de la Seguridad Social durante todo el tiempo de su trabajo activo, no puede negársele la condición de beneficiario de las prestaciones de incapacidad permanente por no estar en alta o situación asimilada en el momento de producirse la incapacidad ( sentencias del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1986, 21 de marzo, 12 de julio y 13 de septiembre de 1988 ). Para la aplicación de esta línea jurisprudencial se exige la acreditación de un largo periodo de cotización efectiva y el abandono del trabajo y la baja en la Seguridad Social por alguna circunstancia impeditiva de la actividad laboral no imputable a la voluntad del trabajador.

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas (la exclusión del periodo transcurrido por el actor en situación de incapacidad temporal sin derecho a prestaciones económicas a efectos del cómputo de la carencia específica), hemos de considerar que en base a que el requisito de la carencia específica acentúa el carácter contributivo de estas prestaciones (impidiendo el acceso a las mismas a las personas que han abandonado el mercado de trabajo y no mantienen las cotizaciones durante los diez años anteriores al hecho causante), la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiende a excluir del cómputo de la misma aquellas situaciones en las que ha existido una imposibilidad de trabajar y, consiguientemente de realizar cotizaciones, por causas ajenas a la voluntad del beneficiario. Para evitar la desprotección de estas personas los Tribunales aplican la "doctrina del paréntesis", que consiste en considerar los periodos transcurridos en situaciones que imposibilitan la realización de cotizaciones no imputables a la voluntad del beneficiario como paréntesis no computable a efectos de carencia específica exigible para las prestaciones de incapacidad permanente. La teoría del paréntesis se aplica a los periodos de paro involuntario subsidiado y no subsidiado, e inscrito en la correspondiente oficina de empleo, a no ser que conste la concurrencia de circunstancias excepcionales justificativas de la no inscripción o de su retraso y en los de invalidez provisional o de prórroga especial de la incapacidad temporal.

Para la resolución del debate planteado hemos de tener en cuenta las siguientes datos, tomados todos ellos del relato fáctico de la sentencia de instancia y de la documentación obrante en las actuaciones: -a) el actor, de cincuenta años de edad, está encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social y ha estado trabajando con la categoría profesional de Cocinero hasta el 31 de marzo de 1989 (hecho probado cuarto y folio 242 de las actuaciones); -b) en el mes de junio de 1989 el actor inicia un proceso de incapacidad temporal y hasta el mes de noviembre de 1996 le fueron extendidos al mismo partes de baja por enfermedad común y de confirmación de manera regular, sin embargo no percibió prestaciones económicas por incapacidad temporal (ILT) ni invalidez provisional (hechos probados segundo y tercero); -c) el actor tiene cotizados un total de 6.986 días (19 años, 1 mes y 21 días), correspondiendo la primera cotización al día 11 de enero de 1962 y la última al día 31 de marzo de 1989 (folio 242 de las actuaciones); -d) al actor le fue reconocida una pensión no contributiva de invalidez con fecha de efectos de 1 de marzo de 1993 (hecho probado quinto).

Teniendo en cuenta los hechos que acabamos de referir hemos de concluir que el Sr. Duque, que contaba con cincuenta años de edad a la fecha del dictamen-propuesta del EVI, acredita un largo periodo de cotización efectiva al Sistema de la Seguridad Social como consecuencia de los servicios prestados como cocinero (más de diecinueve años), que el mismo hubo de abandonar el trabajo activo y causar baja en la Seguridad Social por motivos ajenos a su voluntad, una enfermedad que le impide la actividad laboral y que se encuentra amparado, además, por el hecho de que personado puntualmente durante siete años seguidos en los servicios médicos del INSALUD y del Servicio Canario de Salud le fuera prestada asistencia sanitaria y se le expidieran regularmente innumerables partes de confirmación de baja por enfermedad y que incluso se realizaran dos propuestas de invalidez provisional. Por ello, esta Sala aplicando una interpretación humana e individualizadora de las circunstancias concurrentes en el actor, entiende:

que el mismo se encontraba en situación asimilada al alta en el momento del acaecimiento del hecho causante de la prestación que solicita (el 16 de diciembre de 1996);

que ha de ser excluido el periodo transcurrido por el actor en situación de incapacidad temporal sin derecho a prestaciones económicas (durante el que no pudo trabajar ni cotizar por causas ajenas a su voluntad, al padecer enfermedades de consideración) a efectos del cómputo de la carencia específica, con

lo cual el mismo cumple con los requisitos de carencia exigidos por los *apartados 2º y 3º del artículo 138 del T.R. de la Ley General de la Seguridad Social*.

Razones por las cuales se estima el presente motivo de censura jurídica.

CUARTO.- Igualmente por el cauce del *apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral* denuncia el recurrente la infracción de los *artículos 134 párrafo 3º y 137 párrafo 5º del T.R. de la Ley General de la Seguridad Social (actualmente 136 y 137 párrafo 1º letra c), definidores de la incapacidad permanente y de sus grados*. Argumenta en su discurso impugnatorio, en síntesis, que los padecimientos del actor le incapacitan para la realización de cualquier tipo de actividad laboral o, al menos, para el ejercicio de su profesión habitual de Cocinero.

El grado de incapacidad permanente absoluta está configurado en el T.R. de la Ley General de la Seguridad Social como el que inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio ( *artículo 137 párrafo 5º, 137 párrafo 1º letra c. actual* ). La jurisprudencia del Tribunal Supremo ( sentencia de 9 de febrero de 1987 que ha recopilado la doctrina en tal sentido) establece que

"este grado de incapacidad, teniendo presente el texto de dicho precepto que lo tipifica, sus antecedentes históricos, su espíritu y su finalidad, no sólo debe ser reconocido al trabajador que carezca de toda posibilidad física para realizar cualquier quehacer laboral, sino también a aquél que, aun con aptitudes para algunas actividades, no tenga facultades reales para consumir, con cierta eficacia, las tareas componentes de una cualquiera de las variadas ocupaciones que ofrece el ámbito laboral. A tal fin han de valorarse, más que la índole y naturaleza de los padecimientos determinantes de las limitaciones que ellos generen, éstas en sí mismas, en cuanto impedimentos reales y suficientes para dejar sin posibilidades de iniciar y consumir a quien las sufre las faenas que corresponden a un oficio, siquiera sea el más simple, de los que, como actividad laboral retribuida, con una y otra categoría profesional, se dan en el seno de una empresa o actividad económica de mayor o menor volumen"

(en el mismo sentido, sentencias de 24 de febrero y 16 de julio de 1987). La jurisprudencia viene entendiendo que la declaración de invalidez permanente absoluta debe hacerse con criterio restrictivo por las consecuencias negativas que conlleva, tanto para el operario como para la sociedad, de modo que sólo se puede acceder a tal pretensión cuando se comprueba una situación fisiológica que anule radicalmente cualquier posibilidad de actuación en el mundo laboral ( sentencia de 10 de noviembre de 1982 ), atendiendo exclusivamente las secuelas anatómico funcionales ( sentencia de 25 de enero de 1983 ), o que provoquen una serie de dolores, episodios agudos o trastornos que no permitan llevar a cabo con asiduidad y continuidad el ejercicio profesional ( sentencias de 22 de enero de 1985, 24 de enero, 12 de junio y 22 de noviembre de 1989, 22 de enero, 2 de abril, 30 de junio, 20 de julio, 17 de septiembre, 23 de octubre, 14 de noviembre y 10 de diciembre de 1990 ). La determinación de tal grado de invalidez ha llevado a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a apreciar conjunta o simultáneamente, de un lado, la severidad de la incapacitación y, de otro, las posibilidades reales de hallar ocupación. De tal manera que el *artículo 135 párrafo 5º, del T.R. de la Ley General de la Seguridad Social* no debe ser interpretado mediante un entendimiento literal y rígido sin más de su tenor literal, en evitación de que resulte imposible su aplicación real, y sí, por el contrario, sin perder nunca de vista la objetividad que el sentido propio de sus palabras comporta, en relación con el contexto y sus antecedentes históricos, debe actuarse dicha norma de tal suerte que su aplicación atienda fundamentalmente a alcanzar el espíritu y la finalidad que determinaron su promulgación ( sentencias del Tribunal Supremo de 15 de junio, 5 y 6 de octubre de 1981, 10 de abril, 2 de junio, 26 y 29 de noviembre, 3 de diciembre de 1984, 22 de abril, 10 y 19 de junio de 1985 y 16 y 27 de febrero, 13 de junio de 1989, 22 de enero, 7 de marzo y 11 de diciembre de 1990 ).

Por otra parte, el grado de incapacidad permanente total para la profesión habitual está configurado en el T.R. de la Ley General de la Seguridad Social ( *artículo 137 párrafo 4º, actualmente 137 párrafo 1º letra b* ) como el que impide al trabajador para la realización de todas o las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta. La jurisprudencia ha tenido en cuenta para caso concreto las peculiares circunstancias de mayor o menor dureza de la profesión, así como la exigencia para la dedicación a ésta de la mayor o menor integridad física ( sentencias del Tribunal Supremo de 17 de enero y 29 de junio de 1989 ). Es, por ello, esencial y determinante para una adecuada calificación jurídica de la situación residual del afectado la profesión habitual, de manera que unas mismas lesiones y secuelas pueden ser o no constitutivas de invalidez permanente en función de las actividades o tareas que requiera la profesión del presunto incapaz pues no se olvide que el *artículo 137 párrafo 4º del T.R. de la Ley General de la Seguridad Social*, respecto del grado ahora debatido de incapacidad permanente total lo relaciona con la profesión habitual, debiendo, en consecuencia predicarse que tal grado sólo deberá ser reconocido cuando las secuelas existentes impidan el desempeño de las tareas propias de la actividad laboral con la

profesionalidad, dedicación y constancia que la relación laboral exige.

Del relato fáctico de la sentencia de instancia se desprende que el actor está afecto del siguiente cuadro médico: síndrome depresivo de repetición, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, angina de esfuerzo y hipoacusia sensorial bilateral moderada (hecho probado séptimo). Tales padecimientos le ocasionan las siguientes limitaciones funcionales: complicaciones cardíacas derivadas de la enfermedad hipertensiva (en ocasiones ha mostrado angor de esfuerzo), debe permanecer bajo los cuidados continuos y periódicos de los servicios de cardiología, llevar medicación permanente y dieta adecuada, le están contraindicados todo tipo de trabajo que implique el ejercicio físico o el estrés mental o intelectual y emotivo, estando capacitado para hacer labores de tipo sedentario o pasivo en jornadas limitadas y en ambientes de trabajo saneados y no conflictivos (hecho probado séptimo). Por otro lado, hemos de tener en cuenta que su profesión habitual es la Cocinero, la cual implica desplegar un cierto grado de esfuerzo físico, permanecer en bipedestación durante toda la jornada laboral y estar sometido a estrés.

Por ello, puede afirmarse que el mismo no posee suficiente aptitud física residual para afrontar con rendimiento, eficacia y profesionalidad las tareas esenciales de su profesión habitual, como no fuere con un esfuerzo y sufrimiento añadidos que no son exigibles a ningún profesional y con serio riesgo de menoscabar su salud y agravar su proceso patológico, pudiendo el actor, no obstante, desempeñar otros trabajos eminentemente livianos, sedentarios y sencillos que no impliquen la realización de los esfuerzos para los que se encuentra impedido ("...labores de tipo sedentario o pasivo en jornadas limitadas y en ambientes de trabajo saneados y no conflictivos", según manifiesta el Médico Forense en su informe).

Lo expuesto conduce a la Sala, al no haberlo entendido así el Magistrado de instancia, a la estimación del motivo, por su efecto del recurso y, con revocación de la sentencia combatida, a estimar parcialmente la demanda formulada por el actor contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y a declararlo afecto de invalidez permanente, grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual de Cocinero, con derecho a la percepción de la correspondiente prestación, en la forma reglamentaria del 55% de su base reguladora, que asciende a la cantidad de 62.348 pesetas, y fecha de efectos de 16 de diciembre de 1996.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

## **FALLO**

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por D. Germán contra la sentencia dictada por el JUZGADO de lo SOCIAL Nº 4 de los de Las Palmas de Gran Canaria de fecha 14 de marzo de 2001 y, con revocación de la misma, estimamos parcialmente la demanda formulada por D. Germán frente al INSTITUTO NACIONAL de la SEGURIDAD SOCIAL (INSS) y la TESORERÍA GENERAL de la SEGURIDAD SOCIAL (TGSS) y declaramos al actor en situación de invalidez permanente, grado de incapacidad permanente total para su profesión habitual de Cocinero, con derecho a la percepción de la correspondiente prestación en la forma reglamentaria, del 55% de su base reguladora, que asciende a la cantidad de 62.348 pesetas, y fecha de efectos de 16 de diciembre de 1996.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma y al Ministerio Fiscal.

## **ADVERTENCIAS LEGALES.-**

Contra esta sentencia cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que necesariamente deberá prepararse por escrito firmado por Letrado dirigido a esta Sala de lo Social y presentado dentro de los diez días hábiles siguientes al de su notificación.

Además, si el recurrente hubiere sido condenado en la sentencia, deberá acompañar, al preparar el recurso, el justificante de haber ingresado en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en la entidad de crédito BANESTO, cuenta número 3537/0000661457/01 a nombre de ésta Sala el importe de la condena, o bien aval bancario en el que expresamente se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista. Si la condena consistiere en constituir el capital coste de una pensión de la Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social y una vez se determine por éstos su importe, lo que se le comunicará por esta Sala.

El recurrente deberá acreditar mediante resguardo entregado en la Secretaría de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de la personación, la consignación de un depósito de 300 euros en la entidad de crédito BANESTO, cuenta corriente 24100000661457/01, Sala de lo Social del Tribunal

Supremo.

Están exceptuados de hacer todos estos ingresos las Entidades Públicas, quienes ya tengan expresamente reconocido el beneficio de justicia gratuita o litigasen en razón de su condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social (o como sucesores suyos), aunque si la recurrente fuese una entidad Gestora y hubiese sido condenada al abono de una prestación de Seguridad Social de pago periódico, al anunciar el recurso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación.

Una vez firme lo acordado, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, procediéndose al archivo del Rollo sin más trámite.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el/la Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.